



La movilización armada en Burundi

En 1993, el asesinato del primer presidente electo de Burundi, Melchor Ndadaye, por parte de un grupo de militares fue el detonante de una ola de violencia comunitaria. La represión posterior del Ejército fue de una extremada violencia. A pesar de su virulencia, el golpe de Estado fracasó, pero el Gobierno que resultó del posterior acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios (Uprona y Frodebu) no pudo mantener la seguridad. La violencia selectiva y las masacres se extendieron por el país.

Las fuerzas extremistas de la elite política y militar que habían perdido las elecciones, asumieron el desorden como estrategia política temporal. Paralelamente, se creaban nuevas fuerzas de oposición política que defendían la opción armada, entre ellas el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CNDD), con su brazo armado, las Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD).

A diferencia de otros episodios de violencia, la rebelión no fue desmantelada y continuaría activa y con una capacidad operativa muy significativa. Se iniciaba una guerra civil que causaría la muerte de 300.000 personas entre una población total estimada de seis millones.

En 1996, el exitoso golpe de Estado de Pierre Buyoya supondría el inicio de una nueva etapa de la guerra, en la cual se superaba la fase aguda de enfrentamientos intercomunitarios entre grupos extremistas más o menos desorganizados y se establecía una confrontación militar entre las fuerzas de seguridad del Estado y las rebeliones armadas. El nuevo Gobierno no fue capaz de acabar con las rebeliones y después de un periodo de interrupción, retomó las negociaciones tuteladas por los países de la región. Estas culminarían, a principios del milenio, con los acuerdos de Arusha y, posteriormente, con la firma del alto el fuego entre el principal movimiento de oposición armada, el CNDD-FDD, y el Gobierno de transición. En el año 2005, la elección como presidente de Pierre Nkurunziza, líder del CNDD-FDD, significó una transformación radical del paisaje político y un éxito de la transición.

¿Por qué miles de personas participaron directamente en la lucha armada en Burundi? ¿Qué mecanismos sociales permitieron articular la movilización y la posterior desmovilización? Son las preguntas que este artículo aborda a partir de las entrevistas realizadas a burundeses ex combatientes, y de la revisión de estudios sobre los mismos.

■ La movilización de los combatientes

La literatura sobre las llamadas «nuevas guerras» (Kaldor, 2001) ha analizado sus objetivos políticos, el papel de los estados, las estrategias e intereses de los llamados «señores de la guerra» etc., pero ha prestado muy poca atención a los perpetradores. Considerados como actores pasivos o piezas mecánicas de un juego más amplio, con frecuencia su voz no es recogida ni en los análisis ni en las propuestas políticas de solución. Sin embargo, como mantiene Uvin para las personas que perpetraron las masacres en Ruanda en 1994: «Es evidente que los mensajes de odio emitidos por las elites no son simplemente recibidos por receptores pasivos que automáticamente obedecen las ordenes de sus estimados líderes. Las personas, incluso aquellas que viven en la pobreza, tienen capacidad para escoger los mensajes que respetarán, y modificar los de acuerdo con sus preferencias.» (Uvin, 1998: 67).

Escasean los estudios que mediante trabajo de campo y con métodos rigurosos y sistemáticos de recogida de datos, exploren las dimensiones micro de la guerra, es decir, sobre las percepciones, intereses y situación socioeconómica de las personas, familias y comunidades locales (Justino, 2007). Esto limita nuestra comprensión de este fenómeno social.¹

A través del prisma de Richards, que pone el acento en la guerra como estado de ánimo entre las partes enfrentadas y como forma de movilización social altamente organizada (Richards, 2005), podemos reconocer en Burundi el papel de los organizadores de la violencia, y poner de manifiesto los mecanismos que permiten vincular a líderes y «tropa».

La guerra civil fue un proyecto diseñado fundamentalmente por los líderes hutus, que mediante la organización de la violencia armada respondían a la historia de exclusión y violencia estructural y pretendían acceder al poder y el cambio sociopolítico. El éxito de su proyecto dependía en buena medida de la movilización de parte de la población, que tenía que enfrentarse a las instituciones del Estado y, particularmente, al Ejército.

Durante 2006 y 2007, el autor mantuvo entrevistas en profundidad con tres hombres desertores del último movimiento de oposición armada activo en el país, el

Frente de Liberación del Pueblo Hutu y de su brazo armado, el Frente Nacional de Liberación (Palipehutu-FNL).² Su relato constituye el principal material de este texto, pero también se entrevistó con tres hombres ex soldados de las Fuerzas Armadas de Burundi (FAB) y tres mujeres miembros del CNDD-FDD. La mayoría de las personas entrevistadas son jóvenes. A pesar de las limitaciones metodológicas de esta reflexión, basada en auto narraciones, creemos que recogen diversidad y complejidad, y permiten arrojar luz sobre los detalles de la movilización.

La guerra es un proyecto asumido por colectivos con unas características determinadas. Por ejemplo, la mayoría de los combatientes reclutados durante la guerra (1993-2004) eran menores de edad (Uvin, 2007). Sin embargo, no es posible encajar la historia de cada uno de los combatientes (90.000 personas, la mitad, miembros de rebeliones) en un único relato colectivo. A continuación se analizan, especialmente, los casos de pertenencia a las rebeliones.

■ Constricciones y motivaciones

En Burundi, durante décadas la violencia política y estructural determinó la experiencia de vida de buena parte de la población³ y, además, se producía con una impunidad que generaba frustración y alimentaba un círculo vicioso de venganzas y ataques preventivos. Por otra parte, bajo el régimen en el poder no hay diferenciación entre las esferas económica y política. «El control sobre el Estado y el poder político es sinónimo de control sobre oportunidades económicas, individualmente y como grupo» (Oketch y Polzer, 2002: 104). La historia de la violencia y de la economía estaban íntimamente ligadas.

Jóvenes y niños no eran ajenos a esta violencia: para muchos condicionó su desarrollo hacia la condición de adultos. La mayoría fueron víctimas de la misma y, en ocasiones, víctimas y victimarios.

La dimensión étnica también es un elemento central del contexto. La diferenciación étnica por sí misma no conduce automáticamente al prejuicio negativo de tipo racista. Para que este se produzca es necesario, al menos, una simplificación de la identidad de las personas, reducidas a su etnia, y la valoración moralmente negativa de los atributos de una determinada etnia (Uvin, 1998). A veces, este prejuicio es resultado de construcciones psicoculturales con independencia de las condiciones reales de la población, pero este no es el caso en Burundi, y esto facilita su activación y manipulación por parte de las élites que precisan de la movilización popular.⁴

Por una parte, la elite tutsi en el poder aplicaba políticas discriminatorias y, gracias al efecto del espejo ruandés y a los episodios locales de violencia comunitaria,

fomentaba entre su base social de carácter minoritario (15%, aproximadamente, de la población) un sentimiento de amenaza física y de miedo al cambio.

Por otra parte, la mayoría hutu relacionaba su inseguridad personal, política y económica a su pertinencia étnica, lo cual favorecía el antagonismo que era utilizado y promovido por las elites hutus en la oposición armada para justificar sus acciones y fomentar la movilización. Además, algunos miembros de las elites defendían abiertamente un discurso racista anti-tutsi con derivas genocidas.

Para muchos jóvenes hutus, la conciencia de rivalidad étnica, construida a partir de la frustración y del victimismo que provocaban la exclusión política y económica de su comunidad, fue una razón clave para tomar la decisión de participar en la lucha armada; en el caso de los tutsi, el componente ideológico tuvo un menor peso en la decisión (Mvukiyehe et al, 2006).

Estos elementos son necesarios pero no suficientes para fundamentar la arriesgada decisión personal de participar en la lucha armada y tampoco explican los mecanismos sociales en los que se sustenta la movilización.

¿Por qué algunas personas deciden integrarse en los grupos armados y otras no? Las entrevistas realizadas ponen de manifiesto que, frecuentemente, los combatientes habían sufrido en primera persona experiencias traumáticas, conectadas con las prácticas gubernamentales de exclusión (fracaso o abandono voluntario de los estudios, falta de oportunidades económicas...), los efectos de la violencia armada (orfandad, desplazamiento forzado...), u otros factores (violencia intrafamiliar, proximidad a los líderes extremistas, escasez de tierras para el trabajo en el campo...). En resumen: la inseguridad, el malestar o el enfado son motores para el reclutamiento.

Algunas de las personas entrevistadas manifiestan que se incorporan a un movimiento armado condicionados por sus comunidades o familias. En un contexto de riesgo, estas consideran que la pertinencia de uno de sus miembros a un movimiento, les otorgará protección, en especial ante ataques contra las personas o ante la amenaza de apropiación de sus tierras.⁵

Sin embargo, la opción por las armas no depende sólo de factores externos a los combatientes, la mayoría de jóvenes integran la rebelión como una estrategia afirmativa, que interactúa con los mecanismos de reclutamiento de los organizadores de la violencia. La respuesta más frecuente a la pregunta sobre cómo los reclutas entraban en contacto con la rebelión, es que ellos buscaban a la rebelión (Mvukiyehe et al, 2006; Samii, 2007; y entrevistas del autor).

En Burundi, la crisis era palpable y comportaba una erosión de las estructuras de

decisión, control social y mediación tradicional (por ejemplo, el consejo de notables *ubashingatae*). En contacto con nuevas expresiones culturales y religiosas, los valores comunitarios y tradicionales son desafiados o (re)interpretados. Los jóvenes se sienten infravalorados y bloqueados, quieren dotar, casarse, acceder a su vivienda y a las oportunidades económicas, pero el sistema de autoridad establecido (familiar, comunitario o estatal) se inhibe, es incapaz, de dar respuestas o es percibido como ilegítimo u opresor. Algunos optan por la autoridad de una organización armada que perciben como un canal para su futura inclusión social.

El status quo está en crisis y en la cabeza de los combatientes es reemplazado por el sistema de la guerra para conseguir el cambio. «Gracias a los sentimientos traumáticos y de enfado existentes, los reclutadores rebeldes podían dirigirse directamente a los niños y jóvenes hutus, en lugar de confiar en las elites locales o los jefes de familia. La participación resultante era casi completamente voluntaria» (Samii, 2007: 3).

Los ex combatientes relatan que los miembros de la rebelión tenían una presencia más o menos estable en su territorio y organizaban actividades de propaganda política. Un niño, ex combatiente del Palipehutu-FNL, comenta: «Las palabras de Rwasa [líder del Palipehutu-FNL] nos llegaban al corazón» (entrevista personal, 2007).

A pesar de la especificidad de cada contexto, las pautas de comportamiento de los jóvenes combatientes burundeses no son diferentes de otras situaciones de crisis: «[los jóvenes] son a la vez navegantes sociales del presente y generadores de futuros colectivos y personales. Son, a la vez, actores y receptores de actuaciones, resisten la muerte social de una África poscolonial gerontocrática en la cual fuerzan la apertura de espacios sociales, navegan a través de rutas tradicionales y alternativas para asegurar vidas decentes. A veces, estos esfuerzos conducen hacia una concienciación religiosa; a veces, hacia la migración y, a veces, hacia la guerra...» (Christiansen, Utas y Vick, 2006: 21).

En el interior del movimiento, los rebeldes se sienten integrantes de una estructura que protege y asegura los medios para la supervivencia, formación militar, un lugar en la jerarquía y una función determinada. Para algunos, la lucha armada es un espacio de aprendizaje, de aplicación de capacidades emprendedoras o de innovaciones tecnológicas rudimentarias, que, en ocasiones, se pueden aprovechar en la vida civil; para otros, la lucha activa, el ascensor social en el marco de la jerarquía militar. Todo esto era irrealizable en su contexto local.⁶

Hacia el exterior, el grupo proyecta su poder y control sobre las personas y recibe un implícito reconocimiento social. En este sentido, para muchos jóvenes la guerra

era percibida como el espacio donde desplegar su capacidad, proyectar la voluntad de cambio y obtener los recursos y el reconocimiento para alcanzar la condición de adultos y la consecuente sensación de inclusión social.

Como apunta Richards: «La vida de la rebelión es, por si misma, un forma de trabajo que se realiza en contextos donde otras opciones son ausentes. La lucha se convierte en una vía importante, o la única, para la incorporación social de amplias capas de la juventud» (Richards, 2007, p. 10).

■ El papel de las redes clientelares

Las relaciones sociales también son claves para la movilización armada. Por una parte, el reclutamiento se apoya en vínculos ya existentes. Un estudio preliminar, basado en encuestas a combatientes, pone de manifiesto que «las redes de amigos parecen haber jugado un papel importante en el proceso de movilización: dos tercios de los combatientes entrevistados conocían a amigos en los grupos en los que se integraban» (Samii, 2007: 12).

Por otra parte, la lucha refuerza o genera nuevos vínculos de solidaridad entre los compañeros de lucha. Especialmente relevante es la relación de lealtad y dependencia mutua entre el *patrón* organizador de la violencia con recursos y poder y su *cliente*, el joven rebelde. En parte, se trata de una innovación sociopolítica. Las relaciones clientelares tradicionales vinculaban a un número reducido de personas porque se establecían entre personas provenientes de la misma localidad o clan o, puntualmente, a partir de alianzas interclánicas. Las formas del clientelismo poscolonial, en el marco de los nuevos estados, conllevan la vinculación de miles de personas a un líder o grupo de líderes. En el caso de Burundi, esta estrategia es viable, entre otras razones, por la (re)construcción y activación de la identidad étnica que otorga un vínculo de sentido a una comunidad autodefinida. Los líderes, pretenden convertirse en referentes de este imaginario y de esta manera aumentar su potencial de movilización hasta límites desconocidos en la estructura de poder descentralizado del Burundi precolonial.

Esta tendencia se agudiza en tiempos de guerra. Las dinámicas de (re)producción de redes clientelares se aceleran porque para poder competir en el nuevo contexto han de abrirse e incorporar rápidamente a personas procedentes de territorios y estratos sociales diversos.⁷ Como apunta Richards, «la guerra no estalla porque las condiciones son óptimas sino porque está organizada. Alguien tiene que tomar la decisión de embarcarse en la arriesgada estrategia de conseguir el poder mediante la movilización y la violencia. La iniciativa tiene que ser planificada, los combatientes formados, y las armas tienen que estar disponibles; las tácticas han de ser dise-

ñadas, y las campañas ejecutadas. Esta es la tarea de grupos específicos en una sociedad» (Richards, 2005: 4).

Estos mecanismos arrojan luz sobre la guerra pero también sobre el proceso de negociación de paz y de transición posconflicto. La transición política en Burundi ha respetado los intereses y las formas de legitimidad de las elites enfrentadas. La desmovilización se inicia cuando, por razones diversas, estas alcanzan el acuerdo de parar el combate. Las cuotas étnicas en las instituciones del Estado, reflejadas en el acuerdo de Arusha y después consagradas en la Constitución, ponen de manifiesto que las soluciones aceptadas reconocen implícitamente la importancia del antagonismo étnico, que como, hemos apuntado, es un elemento central del imaginario del reclutamiento y de la guerra.⁸

Por otra parte, el marco legal, la repartición del poder y los recursos de la desmovilización otorgan a los *patrones* de la guerra, autoridad, legitimidad simbólica y recursos para mantener, al menos durante un tiempo, cierto control y lealtad de las redes clientelares creadas durante el esfuerzo de guerra. Sin embargo, la transición es problemática para aquellos que, como Palipehutu-FNL, mantienen públicamente el discurso del antagonismo étnico y el recurso a la violencia.

Las elecciones del 2005 han significado una transformación radical del panorama político: la mayoría de los miembros del nuevo Gobierno son hutu de la antigua oposición armada, como lo son la mayoría de los combatientes del Palipehutu-FLN; en las fuerzas de seguridad del Estado se está integrando a numerosos antiguos rebeldes, y el nuevo *patrón nacional*, el presidente Pierre Nkurunziza, asegura que los desertores del Palipehutu-FNL serán integrados en las fuerzas de seguridad o recibirán una ayuda de desmovilización.⁹

Ante los últimos rebeldes, se abre la posibilidad de participar en un nuevo sistema, y algunos optan por la deserción. Un ex rebelde, desertor del Palipehutu-FNL, comenta: «Yo no encontré la solución de mis problemas en la selva. Así que decidí no continuar. Yo no encontré el éxito...» (Entrevista personal, 2007)

El programa de desmovilización es percibido por los potenciales beneficiarios como apoyo a una estrategia de supervivencia en un contexto nuevo donde la violencia y la rivalidad étnica han perdido su protagonismo. Por eso, cuando algunos desertores del FNL-Palipehutu tienen que enfrentarse a la posibilidad de las promesas incumplidas y, por tanto, de no recibir el apoyo económico previsto o de no poder formar parte de las fuerzas de seguridad, expresan su estupor y, pese a que la experiencia de la guerra les ha defraudado, amenazan veladamente con su reintegración voluntaria al Palipehutu-FNL. «Pasar seis años en la selva y volver a casa sin nada en los bolsillos, eso es chocante» (entrevista personal, 2007). Otro desertor del Pali-

pehutu-FNL, reflexiona: «La rebelión me mantenía, ¿cómo lo haré en la vida civil sin el apoyo del programa de desmovilización?» (entrevista personal, 2007)

El programa de desmovilización tiene una dimensión material indudable pero también tiene una dimensión simbólica, porque los potenciales beneficiarios lo perciben como un rito de inclusión social (Richards, 2007) y de reconocimiento. De hecho, algunos ex rebeldes entrevistados hablan de la desmovilización como de una etapa previa necesaria para poder asumir el discurso hegemónico de la democracia (entrevista de grupo, 2007).

■ Conclusión

La guerra como proyecto social encaja en un esquema de inseguridades humanas y de exclusiones. Para superarlas, las actuaciones públicas de posconflicto han de diseñarse y aplicarse de forma que garanticen una equitativa distribución de recursos y oportunidades, la cohesión y la inclusión de todos los grupos sociales, especialmente de la juventud, canalizando en la vida civil las capacidades adquiridas por muchos durante la lucha armada.

Otro aspecto importante de la nueva gestión política es la superación de la impunidad y la creación de un sistema judicial para todos. Se trata de crear las condiciones que permitan la emergencia de una cultura de paz que sustituya a la cultura de guerra y el recurso a la violencia.

En conclusión, se puede afirmar que en Burundi ha finalizado la guerra pero todavía no se ha conseguido la paz. Todavía es pronto para descartar la pervivencia o la emergencia de líderes organizadores de la violencia capaces de aprovechar las oportunidades de movilización para a la guerra. Seguramente, esta no hablara con el lenguaje de la rivalidad étnica sino que explotará nuevos antagonismos y frustraciones del contexto sociopolítico.¹⁰

Pese a todo, la experiencia burundesa puede considerarse como un ejemplo de transformación negociada del conflicto armado con una potencial influencia positiva en otras sociedades de la región de los Grandes Lagos, todavía hoy marcadas por la represión política y la violencia armada.

Este artículo se basa en el proceso de documentación de la película documental *Syntoniser Amani*, realizada por La Bretxa con la colaboración del Centre d'Estudis Africans, el Centre d'Information des Nations Unies au Burundi, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Justícia i Pau-Barcelona y Search For Common Ground-Burundi; y con el apoyo de la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Más información en <http://www.syntoniseramani.info>.

1. Para el caso de Burundi, ver bibliografía adjunta.
2. El mes de mayo de 2008 el Gobierno y el Palupehutu-FNL firmaron una declaración conjunta de cese de hostilidades y su líder visitó la capital tras décadas en el exilio. En el momento de entregar este artículo, continúan las negociaciones sobre las modalidades de aplicación del alto el fuego y sobre un acuerdo de paz definitivo.
3. Según datos de Naciones Unidas, entre el 1993 y el 2000, aproximadamente, el 50% de la población había sufrido desplazamiento forzado en el interior del país. El 77% de los jefes de familia afirma haber sido afectado directamente por las diferentes crisis, (57% fuertemente; 28% ha perdido algún familiar, y 23% han sido desplazados; el 22,5% de los jefes de familia se convierten en viudos (Nkurunziza i Ngaruko, 2002). En el periodo 1993-2004 se estima que murieron 300.000 personas de una población total de seis millones.
4. Lemarchand considera que el recurso a la identidad étnica como elemento de movilización sociopolítica es una estrategia iniciada por las primeras formaciones políticas para constituir alianzas pero que no se consolidará hasta décadas más tarde, a causa de la revuelta hutu y la represión contra los tutsis en Ruanda y de la represión del Ejército burundés sobre la población hutu, en un fenómeno que el autor denomina «profecía autocumplida» (Lemarchand, 1995). Por otra parte, hay diferencias entre los partidos políticos de adscripción mayoritaria hutu. Malkki (1995) ofrece un análisis histórico sobre el papel del discurso étnico en la creación del Palupehutu-FNL).
5. Samii (2007) establece una fuerte correlación entre el grado de educación y riqueza de las familias hutus y las posibilidades de tener un hijo combatiente. Más años de educación y más riqueza relativa, aumentaban las probabilidades.
6. Recordemos que en 1972 el régimen en el poder había tratado de eliminar a todos los hutus que pudieran ser considerados como «intelectuales» y que la política de discriminación posterior perseguía un objetivo similar.
7. Van Acker y Vlassenroot (2000), en el este de la República Democrática del Congo, y H. E. Vigh (2006), en Guinea-Bissau, describen un mecanismo similar.
8. Por ejemplo, el artículo. 257 de la Constitución establece que, «durante un periodo de tiempo a determinar por el Senado, no podrá haber en los cuerpos de seguridad y defensa una presencia superior al 50% de miembros de un grupo étnico particular».
9. El programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (PNDRR) de Burundi entre el periodo 2004-2008 tiene un coste estimado de más de 84 millones de dólares estadounidenses. La compensación por desmovilización para los combatientes es de más de 500 USD (con variaciones según el rango). La renta per capita en Burundi es de 83 USD (Carames, Fisas y Luz, 2006).

10. Un informe del Centre d'Alerta et de Prévention des Conflits afirma : «Sobre todo en las regiones (...) los jóvenes no han conocido nunca el ascensor social y no han entrado en la capital que por la puerta del servicio. Esto, les lleva a evolucionar al lado del sistema, en una forma de contra sociedad con un sentimiento de rechazo a todo lo que tenga una naturaleza oficial.» (CENAP, 2006: 12). Uvin también advierte que la frustración de los combatientes autodesmovilizados que no han podido disfrutar de las ayudas del PNDRR constituye un desafío para la reintegración y un riesgo para la paz (Uvin, 2007).

BIBLIOGRAFÍA

- CARAMES, A.; FISAS, V. y LUZ, D. (2006): «Análisis de los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) existentes en el mundo durante 2005». Bellaterra: Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona).
- CENTRE D'ALERTA ET DE PRÉVENTION DES CONFLITS (2006): «Burundi post-transition- Les défis a la consolidation de la paix et de la démocratie». Informe. Bujumbura
- CHRISTIANSEN, C.; UTAS, M. y VICK, H. E. (eds.), (2006): *Navigating Youth, Generating Adulthood. Social becoming in an African Context*. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.
- INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2005): «Élections au Burundi: Reconfiguration radical du paysage politique». *Briefing Afrique*, N° 30, Nairobi/ Bruselas.
- JUSTINO, P. (2007): «On the links between Violent Conflict and Household Poverty: How much do we really know?». *Microcon Research working paper 1*. Brighton: Microcon.
- KALDOR, M. (2001): *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Barcelona: Kriterios Tusquets Editores.
- LEMARCHAND, R. (1995): *Ethnic conflict and genocide*. Wilson Center Press, Cambridge. Cambridge University Press.
- LINDEMANN, S. (2008): «Do inclusive elite bargains matter? A research framework for understanding the causes of civil war in Sub-Saharan Africa». Development Studies Institute. London School of Economics and Political Science.
- MALKKI, L. H. (1995): *Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology Among Hutu Refugees in Tanzania*. Chicago: University of Chicago Press.
- MVUKIYEHE, E.; SAMII, C. y TAYLOR, G. (2006): «Wartime and post-conflict experiences in Burundi: an individual level survey». Nueva York. Columbia University y New York University. Presentado en la reunión anual de American Political Science Association.
- NKURUNZIZA J. D.; NGARUKO F. (2002): «Explaining Growth in Burundi: 1960-2000». CSAE WPS/2002-03.
- OKETCH, J.S. y POLZER, T. (1992): «Conflict and Coffe in Burundi» en LIND, J. y STURMAN, K. (eds): *Scarcity and Surfeit: The ecology of Africa's conflicts*. Institute for Security Studies.
- RICHARDS, P. (2005): «New war. An ethnographic Approach.» en *No Peace no War. An anthropology of Contemporary Armed Conflicts*. RICHARDS, P. (ed.). Athens: Ohio University Press; Oxford: James Currey.

-
- RICHARDS, P. (2007): «Peripheral wars in Africa. Is general explanation possible?». *Studia Africana*, nº 18. Barcelona: ARDA-RIDA.
- SAMII, C. (2007): «Revolutionary Mobilization in Burundi». Documento inédito. Columbia University.
- UVIN, P. (1998): *Aiding Violence. The Development Enterprise in Rwanda*. West Hartford: Kumarian Press.
- UVIN, P. (2007): «Ex-combatants in Burundi: Why they joined, why they left, how they fared». *Multi-Country Demobilization and Reintegration Program*, Working Paper nº. 3.
- VAN ACKER, F. y VLASSENROOT, K. (2000): «Youth and Conflict in Kivu: «Komona Clair». *Journal of Humanitarian Assistance* (<http://www-jha.sps.cam.ac.uk/c/c095.htm>) último acceso en junio de 2006.